

TRANSPOSICIÓN DE LA CUARTA DIRECTIVA

El canal de denuncias sobre blanqueo se hace obligatorio

La omisión de esta medida y la falta de procedimientos para su uso serán sancionadas con multas de hasta 60.000 euros

Xavier Gil Pecharromás MADRID.

Todos los sujetos obligados por la Ley de Prevención del Blanqueo de Capitales, incluidos abogados, procuradores u otros profesionales independientes en aquellas cuestiones que les afectan, deberán contar a partir de ahora con canales específicos para la denuncia interna de conductas contrarias a la ley o a los procedimientos internos de la entidad para permitir el cumplimiento de la misma. La omisión de estas obligaciones será sancionable con multas de hasta 60.000 euros.

Así se establece en el Real Decreto-Ley 11/2018, de 31 de agosto, que transpone al Cuarta Directiva europea sobre la materia, y que extiende la obligación de crear canales de denuncia a las Administraciones Públicas para que puedan recibir denuncias sobre potenciales incumplimientos por los sujetos obligados sobre las exigencias de la normativa de prevención del blanqueo.

Los sujetos obligados deben establecer procedimientos internos para que sus empleados, directivos o agentes puedan comunicar, incluso anónimamente, información relevante sobre posibles incumplimientos de esta ley, su normativa de desarrollo o las políticas y procedimientos implantados, cometidos en el seno del sujeto obligado.

Estos procedimientos podrán integrarse en los sistemas de cumplimiento legislativo *-compliance-* establecidos para la comunicación de informaciones sobre la comisión de actos o conductas que puedan ser contrarios a la restante normativa general o sectorial aplicable.

A estos sistemas y procedimientos se les debe aplicar lo dispuesto en la normativa de protección de



Dinero obtenido en una operación policial contra el blanqueo de capitales. EFE

datos de carácter personal para los sistemas de información de denuncias internas. También, deberán, los sujetos obligados, adoptar medidas para garantizar que los empleados, directivos o agentes que informen de las infracciones cometidas en la entidad sean protegidos frente a represalias, discriminaciones y cualquier otro trato injusto.

No obstante, el RDL advierte que este mecanismo no sustituye a los mecanismos específicos e independientes de comunicación interna de operaciones sospechosas de estar

vinculadas con el blanqueo de capitales o la financiación del terrorismo por parte de empleados.

La normativa, además, extiende el tratamiento de las medidas de diligencia reforzada a todas las personas con responsabilidad pública, nacionales y extranjeras. Hasta ahora, solo las extranjeras eran objeto de la aplicación automática de estas medidas.

@ Más información en www.economista.es/ecoley